EL PROCESO DE NULIDAD MATRIMONIAL

El motu proprio «Mitis iudex» y la exhortación apostólica «Amoris laetitia»

DOI: <https://doi.org/10.52039/seminarios.v62i217.126>

ENRIQUE DE LEÓN REY*

En estos últimos años ha habido una serie de intervenciones sobre el matrimonio y la familia por parte del Magisterio, que no siempre han sido bien entendidas.

En primer lugar, la III Asamblea general extraordinaria del Sínodo de Obispos, celebrada entre los días 5 y 19 de octubre de 2014, trató sobre «La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo». Con las sugerencias presentadas por los obispos en esta Asamblea extraordinaria se elaboró un documento, los *Lineamenta*, para preparar la XIV Asamblea general ordinaria; entre las sugerencias manifestadas se recogen las siguientes: «Un gran número de los Padres subrayó la necesidad de hacer *más accesibles y ágiles, posiblemente totalmente gratuitos, los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad*. Además, se propuso: *dejar atrás la necesidad de la doble sentencia conforme*, la posibilidad de determinar una vía administrativa bajo la responsabilidad del Obispo diocesano, así como *un juicio sumario a poner en marcha en los casos de nulidad notoria*. Sin embargo, algunos Padres se manifiestan contrarios a estas propuestas porque no garantizarían un juicio fiable. *Cabe recalcar que en todos estos casos se trata de la comprobación de la verdad acerca de la validez del vínculo*» (*Lineamenta*, 48).

Como consecuencia de estas propuestas, y aun antes de celebrarse la XIV Asamblea ordinaria del Sínodo de Obispos, que tuvo lugar del 4 al 25 de octubre de 2015, el Papa Francisco promulgó el 15 de agosto de ese mismo año el *motu proprio* «*Mitis iudex Dominus Iesus*», el cual, por una parte, reformó el proceso ordinario de nulidad matrimonial y, por otra, creó un nuevo proceso más breve para algunos casos particulares. La

* Juez-Auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid.

finalidad de dicha reforma la explica el propio Papa con estas palabras: «Los votos de la mayoría de mis hermanos en el episcopado, reunidos en la reciente asamblea extraordinaria del Sínodo, [que] solicitaron procesos más rápidos y accesibles. En total sintonía con estos deseos, he decidido establecer con este *motu proprio* disposiciones con las cuales se favorezca no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos y, no en menor medida, una adecuada simplificación [...] de forma que las causas de nulidad sean tratadas por vía judicial [...] porque lo exige la necesidad de tutelar en el máximo grado la verdad del vínculo sagrado» (*Mitis Iudex*, introducción).

Esta reforma, tal y como se dice al comienzo del texto de los nuevos cánones, entró en vigor el 8 de diciembre de 2015.

Pero antes de ver cuáles han sido las reformas más significativas introducidas por esta nueva normativa, vamos a considerar en qué consiste la nulidad del matrimonio, para luego diferenciarla de otras figuras.

Cuando en el lenguaje de la calle se habla de nulidad matrimonial es frecuente unirla a personajes famosos, de forma que poco a poco, queriendo o sin querer, se ha creado una imagen distorsionada de lo que en realidad es la nulidad matrimonial. No son pocos los que piensan que la nulidad matrimonial se «concede» con facilidad a los ricos y famosos por su influencia, en el convencimiento de que al ser «procesos costosos» solamente ellos pueden hacer frente a los mismos. Así, el imaginario colectivo acaba casi identificando la nulidad matrimonial con una especie de «divorcio» eclesiástico al que se acude cuando un matrimonio «fracasa», con el fin de «rehacer» su vida con otra persona.

Pido perdón por haber abusado de las comillas y por haber utilizado quizá demasiados tópicos, pero por desgracia es muy frecuente oírlos, incluso entre personas bienintencionadas. El motivo de todo ello se encuentra en la falta de información y, sobre todo, en la falta de la formación debida sobre estos temas. Por eso vamos a tratar de exponer de la forma más clara y breve posible todo lo que se refiere a esta institución de la Iglesia —el matrimonio, su validez y nulidad— de la que sin ninguna duda depende el ser y el futuro de la Iglesia misma.

Cuando un matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer jurídicamente hábiles para hacerlo —sin que concorra ningún impedimento matrimonial— con capacidad para manifestar el consentimiento, y lo manifiestan legítimamente —observando la forma canónica— nos encontramos con un matrimonio válido que, si se realiza entre bautizados, es, además, sacra-

mento y, por tanto, indisoluble, es decir, que de ningún modo se puede disolver. Esto es lo que sustancialmente recoge el canon 1057 del Código de Derecho Canónico.

Es importante destacar que el matrimonio no nace por la intervención del sacerdote ni por la de los testigos, sino por la voluntad firme, libremente expresada y voluntaria, de los cónyuges. Por eso la Iglesia concede una importancia capital a todo lo que se refiere al consentimiento, para verificar que se ha prestado y que se ha prestado libremente y con la intención de contraer un matrimonio, uno, indisoluble y abierto a engendrar hijos. Por eso, para dar seguridad jurídica a esa manifestación libre del consentimiento entre los esposos, el Derecho Canónico presume que siempre es válido.

Esto significa, para aquellos que no estén familiarizados con el derecho, que del mismo modo que cuando hay sospechas de que alguien ha cometido un delito, hay que demostrarlo fehacientemente, ya que de otro modo no se puede condenar a nadie por gozar todos de la presunción de inocencia, así, el matrimonio celebrado como hemos dicho, goza de la presunción de validez mientras no se demuestre fehacientemente que en realidad es nulo. Esta es la razón por la que no se puede dar crédito, sin más, a las afirmaciones de uno o de los dos cónyuges cuando afirman que su matrimonio es nulo, de modo que tendrán que demostrarlo con los instrumentos que tenemos a disposición, que no son otros que el proceso de nulidad con todas sus garantías.

Según esto, se dice que un matrimonio es nulo cuando se prueba que ha fallado alguno de los requisitos que señalamos más arriba: inhabilidad de los contrayentes, consentimiento viciado o defecto de forma; en estos casos el matrimonio es nulo, luego no *anulable*, y por eso no se puede hablar de *anulación*, ni tampoco de *conceder* la nulidad, sino de declaración de nulidad.

Cuando, en el tráfico jurídico, dos personas contratan sobre un objeto concreto, establecen unas cláusulas que ambas han cumplir, de tal forma que si una de ellas incumple dichas cláusulas, la otra puede solicitar la rescisión de ese contrato por incumplimiento. Asimismo, cuando alguna de esas cláusulas resulta gravosa por causas ajenas a la voluntad de las partes contratantes, se puede pedir la *anulación* del contrato, es decir, que deje de obligar a las partes. Sin embargo, cuando se declara la *nulidad* de un contrato, se está diciendo que *nunca ha habido contrato*, aunque haya existido una apariencia del mismo, porque nunca llegó a nacer por causa de un obstáculo insalvable.

La precisión que acabo de hacer no es menor, pues en el matrimonio canónico no cabe ni la rescisión ni la anulación del mismo, que en el caso del matrimonio civil, en la mayoría de los Estados, equivaldrían, respectivamente, al divorcio de mutuo acuerdo (rescisión) o al divorcio a instancia de parte (anulación); en ambos casos se rompe un vínculo válido (o que podía ser válido) al no importar la validez. En el matrimonio canónico *solamente* cabe la declaración de nulidad del matrimonio, es decir, que dicho matrimonio nunca fue válido.

Por tanto, si un matrimonio nace válido, aunque fracase, nunca será nulo; del mismo modo que si nace nulo, por mucho tiempo que pase y muchos hijos que haya, ese matrimonio puede ser declarado, como tal, nulo; no se convierte en válido. Y al contrario, el proceso de nulidad matrimonial nunca será, en sentido estricto, un «remedio» o «solución» para resolver una situación matrimonial por dolorosa que ésta sea, si es que ese matrimonio concreto es válido.

Es cierto que hay algunos supuestos excepcionales en los que se habla de *disolución* del vínculo y no de nulidad. Es el caso del matrimonio rato y no consumado. Cuando se habla de matrimonio rato se quiere expresar que ese matrimonio ha sido contraído entre dos bautizados, y por lo tanto el matrimonio es sacramento (evidentemente, el matrimonio entre un bautizado y un no bautizado, nunca es sacramento, aunque sí verdadero matrimonio). Pues bien, cuando nos encontramos ante un matrimonio rato pero que *no ha sido consumado*, es decir, que después de contraer matrimonio los esposos no se han unido carnalmente (consumación), se puede solicitar a la Santa Sede la llamada *dispensa* de matrimonio rato y no consumado, que por supuesto supone la disolución del matrimonio.

En estos casos se ha de realizar un procedimiento administrativo con unas normas específicas, en el que se instruye un expediente que se eleva a la Santa Sede, concretamente al Tribunal de la Rota Romana, quien en su caso propone al Santo Padre que conceda o no dicha dispensa. En este caso, sí se puede hablar de *conceder*, puesto que es una gracia, y solamente la gracia se concede, se da gratuitamente, a través de una dispensa.

Pero volvamos a la nulidad matrimonial. Como creo que se acaba de expresar con claridad, en el caso del matrimonio canónico, rato y consumado, no cabe ni la dispensa, ni la rescisión, ni la anulación, sino solamente la declaración de nulidad. Pues bien, cuando alguno de los dos cónyuges, únicos legitimados para solicitar la declaración de nulidad (con excepción del Promotor de justicia en algunos casos) consideran que su

matrimonio puede ser nulo, pueden y deben acudir a los Tribunales eclesiásticos, habiéndose asesorado previamente sobre si en su caso hay o no posibilidades para iniciar un proceso.

Es evidente que nunca se plantea un proceso de nulidad matrimonial en un matrimonio en el que los esposos se llevan bien, se quieren y están unidos, con descendencia o sin ella; por el contrario, en el cien por cien de los casos se llega a este planteamiento después de una situación matrimonial crítica que acaba, antes o después, en una ruptura, unas veces amistosa y otras incluso con un fuerte enfrentamiento. Y de todo ello podemos concluir que cuando existe un matrimonio nulo es probable que antes o después, fracase; sin embargo, es evidente también, que no todos los matrimonios que fracasan son nulos. Unos fracasarán, ciertamente, porque son nulos, pero muchos o pocos, los que sean, fracasan porque los esposos, uno u otro o los dos, no ponen de su parte lo que les corresponde o porque tal vez se precipitaron en su decisión de contraer matrimonio; pero esto no es motivo para pedir la nulidad del matrimonio.

Por eso, la nulidad matrimonial en la Iglesia nunca se ha visto ni se puede ver como un remedio para matrimonios fracasados, pues su finalidad no es la de dar una segunda oportunidad. Nadie puede contraer matrimonio obligado, porque entonces es nulo, y nadie debería precipitarse en tomar la decisión. Cuando una persona siente la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa o a una mayor entrega a Dios, ha de tener un tiempo de discernimiento de su vocación, y por eso ha de pasar por el seminario o el noviciado, y después de un tiempo prudencial, se decidirá conociendo el contenido de su vocación y sus obligaciones, además de aconsejarse de personas prudentes. Pues bien, el matrimonio también es una vocación, así lo ha remarcado el Concilio Vaticano II (*Lumen gentium*, 41) y por eso no se entiende que muchos cristianos acudan al matrimonio con poca preparación y sin apenas conocerse mutuamente.

A través de las causas de nulidad que se deben estudiar y sentenciar en el Tribunal de la Rota Española, al que llegan causas de nulidad procedentes de toda España, se aprecia que no pocos jóvenes consideran el noviazgo no como un tiempo de preparación al matrimonio, sino como un tiempo de amistad íntima que con frecuencia no tiene como fin el matrimonio, de tal forma que en ese período no son conscientes de la necesidad de conocer al otro: sus gustos, sus virtudes, sus defectos, sus afanes, sus reacciones, etc. Y tampoco, en muchos casos, buscan el consejo y el acompañamiento de personas que les orienten y que les formen sobre qué es el matrimonio, qué implica y a qué se comprometen.

Puede parecer evidente que todo cristiano sabe qué es el matrimonio, sin embargo, hoy día es habitual que únicamente sepan que «es para toda la vida», aunque «si nos va mal, nos separamos». Tal vez estas expresiones simplifiquen en exceso el planteamiento de muchos jóvenes, pero es frecuente oír estas afirmaciones antes de contraer matrimonio. De hecho, en no pocos casos el matrimonio se ve como un modo de «no estar solo/a», de forma que cada uno continúa con sus cosas, con sus amigos, con su trabajo, y ya más adelante se plantearán tener descendencia, por ejemplo. No se ve el matrimonio como un «consorcio que implica toda la vida», en el que cada uno se da a sí mismo por entero, sin esperar nada a cambio, porque el fundamento de ese consorcio de toda la vida es el amor, y amar es querer y buscar el bien del otro sin esperar nada a cambio. Este concepto de donación recíproca hoy día no se puede dar por descontado, hay que asegurarse de que los esposos lo saben y lo aceptan, porque de otro modo no contraerán un matrimonio válido.

Volvamos a la nulidad matrimonial. Supongamos que dos esposos, después de una situación de crisis en la que han acudido a la mediación familiar, no han podido superar sus diferencias y se plantean la nulidad de su matrimonio. Pues bien, lo primero es acudir a un profesional solvente, abogado, patrono estable o asesor cualificado, que pueda verificar con una amplia entrevista si ese matrimonio es susceptible de ser declarado nulo o no. En caso afirmativo, se inicia el proceso de nulidad, como cualquier otro proceso, con un escrito de demanda, muy sencillo, en el que no hay que dar demasiados detalles, sino los imprescindibles para justificar la presentación de la demanda. En caso de que la presente sólo uno de los esposos, se cita al otro para que manifieste lo que crea oportuno y participe en el proceso. A partir de ahí se practican las pruebas, y una vez finalizadas, se dicta sentencia en la que se declara si consta o no la nulidad del matrimonio. En caso de que se declare la nulidad del matrimonio y la sentencia no se recurra en apelación, una vez firme la sentencia, ambos cónyuges pueden contraer un nuevo matrimonio, siempre que no se le haya prohibido expresamente.

En efecto, en algunos casos, aunque se declare la nulidad del matrimonio, se ha de imponer una prohibición a uno o a ambos cónyuges que le impida contraer un nuevo matrimonio. Y esto tiene una razonable explicación: si la nulidad se debe, por ejemplo, a una incapacidad de algún cónyuge para manifestar el consentimiento y si esa incapacidad persiste, entonces no se puede permitir que contraiga un nuevo matrimonio que, en todo caso, también sería nulo. Por este motivo, para asegurarse de que

ha superado esa incapacidad, en caso de que quiera contraer un nuevo matrimonio, habrá de someterse a una revisión, que ordinariamente realizará un perito.

Pero ¿cuáles son las causas, en concreto, que provocan la nulidad matrimonial? Hemos visto al principio los tres grandes grupos de obstáculos; ahora vamos a analizar brevemente cada uno de ellos.

En el caso de los impedimentos, es raro que se dé alguno de ellos, pues en el expediente matrimonial que se ha de instruir previamente a la celebración del matrimonio se ve si existe o no; estamos hablando, por ejemplo, del impedimento de consanguinidad (entre hermanos o tío con sobrino), de vínculo, porque ya estaba previamente casado, etc. Como puede observarse, estos impedimentos generalmente son fáciles de detectar previamente.

El segundo grupo se refiere a la manifestación legítima del consentimiento, es decir, a la forma canónica, que esencialmente consiste en la intervención de un ministro cualificado, con jurisdicción, normalmente el párroco, que *pide* la manifestación del consentimiento de los contrayentes ante dos testigos (canon 1108 del Código de Derecho Canónico). En este caso, se daría la nulidad si el sacerdote que asiste no tuviera jurisdicción o si simplemente no se observó la forma canónica.

En estos dos casos: existencia de un impedimento y carencia o defecto de forma canónica, el proceso matrimonial sería documental, mucho más breve que el ordinario, ya que no harían falta más pruebas que la demostración de la existencia del impedimento y del defecto de forma, cosa que se hace habitualmente con un documento indubitado. Este proceso se recoge en los cánones 1688 a 1690 del Código de Derecho Canónico.

Sin embargo, la causa más frecuente por la que se declara la nulidad del matrimonio es la ausencia del consentimiento por incapacidad o el defecto del mismo por un vicio que lo hace ineficaz. Así tenemos, en primer lugar, que la ausencia del consentimiento puede darse cuando en el momento de manifestarlo *falta el uso de razón* (en caso de demencia, por ejemplo); o cuando uno de los cónyuges *padece un grave defecto de discreción de juicio*, porque no ha podido conocer y/o discernir lo que supone el matrimonio, o no ha sido libre internamente para querer el matrimonio (por ejemplo, cuando la esposa se ve interiormente compelida a casarse en caso de embarazo); o cuando uno de los cónyuges es *incapaz para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica*, es decir, que uno de los cónyuges o los dos son incapaces de

entregarse y de asumir y cumplir esas obligaciones matrimoniales esenciales, por ejemplo, cuando existen trastornos graves de la personalidad, que sin ser enfermedades psíquicas, son anomalías que en su caso impiden, por lo ya explicado, manifestar un consentimiento válido. Estos tres supuestos se recogen en el canon 1095, y los dos últimos son, con mucho, los más alejados en los procesos de nulidad matrimonial.

A continuación se encuentran los que serían propiamente vicios del *consentimiento*. Se parte de que el consentimiento lo manifiestan personas capaces, pero en el momento de manifestarlo se produce un vicio que lo hace nulo. El vicio del consentimiento más habitual es la simulación del consentimiento, es decir, una persona capaz manifiesta el consentimiento matrimonial, pero internamente está excluyendo o bien el matrimonio mismo o bien un elemento o propiedad esencial del mismo. Puede parecer contradictorio que alguien quiera casarse y al mismo tiempo lo excluya, pero como veremos seguidamente es posible.

En el primer caso, exclusión del matrimonio mismo, se da cuando una persona que contrae matrimonio canónico, en realidad lo rechaza de plano porque no lo acepta, si bien lo contrae por congraciarse con el otro cónyuge, con su familia, etc.; en realidad está excluyendo el matrimonio mismo; no se trata de rechazar la ceremonia religiosa, pues pueden casarse canónicamente solicitando a la autoridad la dispensa de la forma canónica, y si permanece en su rechazo al matrimonio mismo, esa persona no contrae un matrimonio válido.

Igualmente, quien excluye un elemento esencial del matrimonio, como la unidad (uno con una), la fidelidad, la indisolubilidad o la prole, también está contrayendo un matrimonio nulo, porque al excluir uno de los elementos o propiedades esenciales, está vaciando de contenido el consentimiento matrimonial. Estos casos se dan cuando bajo ningún concepto se acepta la indisolubilidad o se excluyen positivamente los hijos (aunque luego haya descendencia), porque lo que importa es lo que haya querido en el momento de contraer matrimonio.

Sea como fuere, quisiera hacer hincapié en la importancia que la Iglesia da al consentimiento de los cónyuges, porque es lo único que produce el vínculo matrimonial: la voluntad de los contrayentes libremente manifestada. Por eso, si lo manifiestan públicamente y con las solemnidades previstas, la Iglesia es *escrupulosamente respetuosa* con esa manifestación de voluntad, dando primero validez a lo que han manifestado públicamente, y después protegiéndola con esa presunción de validez. Pero si uno o ambos afirman que, en realidad, han manifestado un consentimiento

falseado, viciado, la Iglesia indaga y lleva a cabo las pruebas necesarias para verificar que es así, y si tal cosa finalmente se demuestra, declarará la nulidad del matrimonio, porque lo único que le interesa a la Iglesia es la verdad, estrictamente, ya que solamente en la verdad el fiel cristiano alcanzará la salvación de su alma. Y esa, y sólo esa, es la finalidad del proceso de nulidad matrimonial: determinar si un concreto matrimonio es nulo o válido, es decir, la verdad sobre ese matrimonio, nunca declararlo nulo a toda costa para «resolver» supuestamente un problema. Precisamente por esto, a los jueces que intervienen en el proceso se les exige que alcancen la *certeza moral* necesaria de la nulidad, de tal forma que si no la alcanzan, el matrimonio se sigue considerando válido en virtud de la presunción de validez; habrá que romper esa presunción demostrando con pruebas la nulidad, pues del mismo modo que en lo penal se aplica el principio *in dubio pro reo*, en el matrimonio se aplica el principio *in dubio pro matrimonio*.

Evidentemente, en los casos de simulación del consentimiento la dificultad se encuentra en la prueba de la misma, que podrá ser por la declaración de los cónyuges junto con la testifical de parientes y amigos de los mismos que lleven al Tribunal al convencimiento de que efectivamente ese cónyuge en concreto, simuló el consentimiento matrimonial. En estos casos, si se declara la nulidad del matrimonio por simulación, también se puede imponer la prohibición de contraer un nuevo matrimonio hasta que quede demostrado que el cónyuge en cuestión se ha retractado de su posición.

Además de la simulación del consentimiento, también existen otros vicios del consentimiento, menos frecuentes, como pueden ser: el error en una cualidad principal y directamente pretendida, el error doloso, la violencia o miedo padecida por uno de los cónyuges, etc., que no vamos a desarrollar en este momento por ser de menor incidencia.

La nueva normativa de 15 de agosto de 2015, contenida en el *motu proprio* «*Mitis Iudex*», no introdujo nuevos capítulos o causas de nulidad, pero sí algunas novedades en el proceso. De entre ellas, trataré de exponer brevemente las que considero más importantes.

1. En primer lugar, ha suprimido la *remisión obligatoria de la causa al Tribunal de segunda instancia*. ¿Qué significa esto? El 3 de noviembre de 1741, el papa Benedicto XIV (Próspero Lambertini) introdujo por primera vez la necesidad de que hubiera dos sentencias declarativas de nulidad, primera y segunda instancia, para que los cónyuges pudieran contraer

nuevas nupcias. Y esto lo hizo «por la demasiada facilidad e inconsideración con que, sentenciando precipitada y temerariamente los jueces a favor de la nulidad de dichos matrimonios, daban a los consortes libertad para casarse con otros» (constitución *Dei miseratione*, de 3 de noviembre de 1741). Esta noticia, dice el Papa, le ha llegado desde diversos países de Centroeuropa y, en concreto, le han informado que «algunos varones (otro tanto sucedía también con bastantes mujeres) se han llegado a casar hasta tres veces por la demasiada precipitación de los jueces...».

El Papa, ante esta situación, creó primero la figura del Defensor del Vínculo para que actuara como un Ministerio Fiscal en defensa de la validez del vínculo, y posteriormente estableció la obligación del Defensor del Vínculo de recurrir en apelación todas las sentencias que declararan la nulidad del matrimonio, para que el tribunal de apelación revisara de nuevo el proceso.

Esto cambió con el Código de Derecho Canónico de 1983, que suprimió esa obligación del Defensor del Vínculo de apelar y estableció la obligación del Tribunal de primera instancia de remitir la causa al Tribunal de apelación, de forma que si consideraba que estaba bien instruida y el matrimonio era nulo, bastaba un simple Decreto de confirmación de la sentencia; en caso contrario, se debían complementar las pruebas practicadas.

Pues bien, la reforma de 15 de agosto de 2015 suprime esa obligación de remitir la causa al Tribunal de segunda instancia, de forma que si transcurre el plazo de apelación sin que ninguna parte apele, la sentencia es firme, y si es afirmativa, ya pueden contraer nuevo matrimonio. Con esta medida ha querido agilizar el proceso reduciendo el tiempo de duración, aunque de momento en muchos tribunales, y debido al incremento de los procesos que se han iniciado, más que reducir los tiempos, se han alargado.

2. En segundo lugar, se ha introducido el llamado *proceso más breve ante el Obispo*, que se recoge en los cánones 1683 a 1687 del Código de Derecho Canónico. Este proceso más breve exige dos requisitos fundamentales: 1) que la demanda sea presentada por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro; y 2) que se den circunstancias de hechos y personas, afianzadas por testimonios y documentos que no requieran una investigación o una instrucción más pormenorizada, que hagan patente la nulidad. En estos casos, se practican las pruebas en una sesión y se trasladan las actas al Obispo, el cual, con el consejo de un asesor, decide si declara la nulidad o si ha de continuarse con el proceso ordinario al no haberse adquirido la certeza moral sobre la nulidad.

3. En tercer lugar, se promueve *la gratuidad del proceso de nulidad matrimonial*. En efecto, entre los criterios fundamentales que han guiado la obra de reforma, el Papa exhorta en *Mitis Iudex*: «Cuiden las Conferencias episcopales que en cuanto sea posible, y salvada la justa y digna retribución de los operadores de los tribunales, se asegure la gratuidad de los procesos, para que la Iglesia, mostrándose a los fieles como madre generosa, en una materia tan estrechamente ligada a la salvación de las almas, manifieste el amor gratuito de Cristo».

Ante todo, hay que señalar que esa gratuidad ya se salvaguardaba en la actualidad; así, las tasas que cobra un Tribunal eclesiástico por la tramitación de un proceso de nulidad, que corresponden a los gastos que se producen en dicho Tribunal –en el que trabajan Defensores del Vínculo y Notarios, muy frecuentemente laicos y padres o madres de familia, además de clérigos– no superan los 600-700 euros en primera instancia; no obstante, cuando una parte solicita el patrocinio gratuito por no poder hacer frente a esos gastos, se le concede sin ningún problema, y entonces es el Tribunal el que se hace cargo de los mismos. Pero además de las tasas, se generan también unos honorarios a favor de abogados o profesionales acreditados, que debe abonar la parte, al margen del Tribunal. También en esos casos, si la parte no puede hacer frente a los mismos, se les designa un abogado de oficio de cuyos honorarios, inferiores, sin duda, se encarga el propio Tribunal. Puedo asegurar que, en el Tribunal de la Rota Española, cerca de la mitad de las causas que allí se tramitan desde hace muchos años, se llevan a cabo con patrocinio gratuito o con reducción de gastos. Además, en los casos en que debe intervenir un perito psicólogo o psiquiatra, también deben cobrar sus honorarios por el trabajo realizado, ya que ningún profesional se puede permitir el trabajar de forma gratuita.

Esta recomendación que hace el Santo Padre insiste, de alguna manera, en la institución del patrocinio gratuito ya existente, pero tiene una novedad: encomienda la coordinación de la puesta en práctica de esta gratuidad a las Conferencias episcopales, «salvada la justa y digna retribución de los operadores de los tribunales».

En los pocos meses que lleva en vigor esta reforma, han sido las diócesis las que han tomado la iniciativa, si bien de forma dispar: mientras en unas se mantiene la misma disciplina del patrocinio gratuito, en otras se ha limitado la cantidad máxima que un abogado puede cobrar por un proceso (varía de los 1.000 euros a los 2.500 euros, dependiendo de las diócesis), aconsejando en todo caso a los cónyuges que puedan,

que entreguen en el Tribunal un generoso donativo para compensar las causas de aquellos que no pueden entregar nada. Es esta una solución arriesgada, pues la historia nos demuestra que cuando se deja a la libre iniciativa de los cónyuges la remuneración por el proceso, las causas podrían tener distinta velocidad en su resolución en función de la mayor o menor generosidad del donativo.

Más recientemente, el 8 de abril de 2016, el Santo Padre ha promulgado la exhortación apostólica postsinodal *Amoris laetitia* sobre el amor en la familia. En su capítulo octavo: «Acompañar, discernir e integrar la fragilidad», ofrece una serie de indicaciones pastorales sobre la atención espiritual de aquellas personas que se encuentran en una situación matrimonial irregular, o que sin haber sido declarado nulo su matrimonio, han iniciado una nueva relación de hecho o contraído matrimonio civil. Quede claro que esta exhortación apostólica, precisamente por su carácter pastoral, no normativo, nada añade a la regulación del proceso de nulidad matrimonial al que acabamos de referirnos, y así lo afirma el Santo Padre de forma explícita en el número 300: «Si se tiene en cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas... puede comprenderse que no debía esperarse del Sínodo o de esta exhortación *una nueva normativa general de tipo canónico*, aplicable a todos los casos».

En el número 292 de dicha exhortación apostólica, el Papa recuerda: «El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad».

Después de esta completa descripción de lo que es y lo que implica el matrimonio, en los números 296 a 300 se refiere el Papa al «Discernimiento de las situaciones llamadas ‘irregulares’», sobre las cuales podría considerarse un excelente resumen lo que afirma en el número 300: «En este proceso será útil hacer un examen de conciencia, a través de momentos de reflexión y arrepentimiento. Los divorciados vueltos a casar deberían preguntarse cómo se han comportado con sus hijos cuando la unión conyugal entró en crisis; si hubo intentos de reconciliación; cómo es la situación del cónyuge abandonado; qué consecuencias tiene la nueva relación sobre el resto de la familia y la comunidad de los fieles; qué ejemplo ofrece esa relación a los jóvenes que deben prepararse al matrimonio. Una

reflexión sincera puede fortalecer la confianza en la misericordia de Dios, que no es negada a nadie. Se trata de un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que «orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios. La conversación con el sacerdote, en el fuero interno, contribuye a la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer. Dado que en la misma ley no hay gradualidad (*Familiaris consortio*, 34), *este discernimiento no podrá jamás prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia.*

Para que esto suceda, deben garantizarse las condiciones necesarias de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y con el deseo de alcanzar una respuesta a ella más perfecta. *Estas actitudes son fundamentales para evitar el grave riesgo de mensajes equivocados, como la idea de que algún sacerdote puede conceder rápidamente 'excepciones', o de que existen personas que pueden obtener privilegios sacramentales a cambio de favores.* Cuando se encuentra una persona responsable y discreta, que no pretende poner sus deseos por encima del bien común de la Iglesia, con un pastor que sabe reconocer la seriedad del asunto que tiene entre manos, *se evita el riesgo de que un determinado discernimiento lleve a pensar que la Iglesia sostiene una doble moral*» (el subrayado en toda la cita es nuestro).

Como se puede apreciar, nada de lo dicho por el Papa, como ya lo advirtió anteriormente, tiene carácter normativo, pero he reproducido íntegramente esta cita porque hace referencia explícita a «las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia», que sí son comunes con la finalidad del proceso de nulidad matrimonial y que, en todo caso, han de tenerse en cuenta a la hora de discernir esas situaciones matrimoniales irregulares en las que se incurre cuando se inicia una convivencia de hecho o cuando después de un primer matrimonio no declarado nulo, se contrae un matrimonio civil.

«La Iglesia sabe bien que Jesús mismo se presenta como Pastor de cien ovejas, no de noventa y nueve. Las quiere todas» (*Amoris laetitia*, 309) y, por este motivo, la misericordia a la hora de aplicar las normas que el mismo Jesús nos transmitió («Si uno repudia a su mujer la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio», Mt 5, 32. «Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres; pero, al principio, no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer –no hablo de unión ilegítima– y se casa con otra,

comete adulterio», Mt 19, 8-9) debe fundamentarse siempre en la verdad y respetarla, puesto que, en el caso contrario, ya no podría hablarse de misericordia.

Si estamos ante un matrimonio válido pero fracasado, por muy dura que parezca su situación, la misericordia nunca puede consistir en declararlo nulo para que puedan contraer un nuevo matrimonio, porque esa nulidad *no es la verdad*; sin embargo, sí se puede y se debe agilizar el trámite necesario, y con el menor coste posible, para llegar cuanto antes a la certeza moral de si un matrimonio es válido –como se presume– o nulo.